
Cultura política y justicia mafiosa en Colombia*

Political culture and mafia justice in Colombia

Óscar Mejía Quintana**

Universidad Nacional de Colombia

omejiaq@unal.edu.co

Resumen

El presente artículo aborda la temática de la cultura mafiosa en Colombia. Sus ejes principales son, sustancialmente, que la cultura mafiosa se basa en una cultura política tradicional y carismática y que, al ser este tipo de cultura política predominante en Colombia, la cultura mafiosa es parte constitutiva de nuestra identidad nacional. El escrito reconstruye las diferentes perspectivas, teóricas y empíricas, que han intentado dar razón de esta cultura mafiosa en el país y de qué manera, a partir de allí, se configuró igualmente una justicia mafiosa.

Palabras clave: Cultura política mafiosa, estado mafioso, justicia mafiosa.

Abstract

This article deals with the subject of mafia culture in Colombia. Its core statements are, substantially, that mafia culture is based on a traditional and charismatic political culture and, as this type of political culture is prevailing in Colombia, that mafia culture is a constituent part of our national identity. This paper pieces together the theoretical and empirical perspectives that have tried to explain this mafia culture in the country and, from there, in what way was a mafia justice configured.

Keywords: mafia political culture, mafia State, mafia justice.

Fecha de recepción: 11 de marzo de 2018.

Fecha de aceptación: 30 de abril de 2018.

* Para citar este artículo: Mejía Quintana, O. (enero-junio,2018). Cultura política y justicia mafiosa en Colombia. *Revista Diálogos de Saberes*, (48) 91-108. Universidad Libre (Bogotá). <https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.48.2018.4715>

El artículo es fruto de reflexiones suscitadas en la cátedra “La cultura mafiosa en Colombia” impartida por el autor en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) (Sede Bogotá).

** Profesor titular del Departamento de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Filósofo de la UNAL, magíster en Filosofía Moral y Ph. D. en Filosofía Política de la Pacific Western University. Adelantó su segundo doctorado en Filosofía del Derecho en la UNAL bajo la dirección del profesor Guillermo Hoyos. Correo electrónico: omejiaq@unal.edu.co

Introducción

La cultura mafiosa en Colombia es un fenómeno inocultable cuyo punto de inflexión se produce hace más de 25 años con el asesinato de Luis Carlos Galán a manos del cartel de Medellín y, si nos atenemos a las investigaciones en punta, con la complicidad de sectores políticos comprometidos ya con el narcotráfico. Lo cierto es que, a partir de ese asesinato, el fenómeno del narcotráfico, cuyos tentáculos ya habían penetrado amplios sectores de la vida nacional, en especial de sus regiones por la producción y el tráfico de la droga, se proyecta con fuerza y decisión sobre la vida social y política del país.

El hecho mismo de que la Constituyente del 91 se convocara en el marco de una crisis sin precedentes en la que el Estado reconoce su impotencia para darle salida por los cauces institucionales y que la influencia del narcotráfico para prohibir la extradición se hubiera hecho evidente pone de presente que su influencia ya no era solo clandestina, sino que tenía la clara determinación de hacerse política.

El dinero, no importa de dónde provenga, se vuelve el rasero de medición más que los méritos o los logros por esfuerzo propio. La narrativa y el cine empiezan a dar cuenta de ello de manera sistemática: los tiempos en que Macondo y el realismo mágico pretendían caracterizar la identidad colombiana empiezan a ser reemplazados por una narcocultura que inicialmente viene de la mano de clases y sectores emergentes, pero que bien pronto se filtra al conjunto de la sociedad.

León Valencia (21 de mayo de 2008) lo describía, entre jocosa y dramáticamente, así:

Aquí, en estas tierras ubérrimas, en este desbordado río de la imaginación, ha nacido el narc déco. Hay un eco francés en esta corriente criolla; también acá su influencia trasciende las artes y se afina con una fuerza en la vida cotidiana. Pasa con fluidez de la literatura, la música y la arquitectura al cuerpo exuberante de las niñas de 15 años; se detiene juguetona en la pintura, avanza hacia la manera de vestir de los señores y descansa, por fin, en las salas de cine. Pero los franceses van a palidecer cuando se den cuenta de que sus ‘años locos’, su *belle époque*, fue un juego de niños comparado con nuestro estridente cambio de milenio, con nuestra era de carteles, ‘paras’ y águilas. Van a ver que nuestro arte decorativo no se detuvo en los interiores de casas y edificios y, con gran audacia, se metió con el cuerpo y se propuso moldear senos y culos, cincelar caderas y muslos, corregir labios y respingar narices (párrs. 2-3).

El presente escrito busca explorar la relación entre la cultura política y la cultura y justicia mafiosas en Colombia, convencido de que el piso de las segundas se los da la primera y que es, por tanto, imperativo evidenciar esos nexos. La cultura mafiosa encuentra un caldo de cultivo propicio en la cultura política colombiana que hoy en día podemos entender mejor que hace 20 años (Jaramillo Uribe, 1997; Martz, 1969).

Cultura mafiosa en Colombia

La cultura mafiosa en Colombia es un fenómeno inocultable. Se venía perfilando desde la década de los setenta a nivel nacional, si bien ya tenía antecedentes regionales tanto en la costa

Caribe como en el interior en el contrabando, tan propio al *ethos* de la primera, y en el negocio de las esmeraldas, en el altiplano cundiboyacense, particularmente. Ambas situaciones se verían más tarde catalizadas durante la bonanza de la marihuana, de nuevo, tanto en la región costera, por la famosa marihuana de la Sierra Nevada, como en el altiplano, paso obligado de otra famosa variante cultivada en los llanos orientales.

Alfredo Molano (28 de marzo de 2008) daba esta lectura del fenómeno en sus orígenes:

En nuestro medio hay una herencia política que va de los chulavos y pájaros de los años 50, pasa por las bandas de esmeralderos y contrabandistas de los 60 y 70 y entrega su legado a los narcos, llamados mágicos —juego burlón con la palabra mafia—, que reinan hasta hoy y que ya compraron boleto “a futuro” bajo el nombre de “los emergentes”. Fue sin duda la aristocracia del país —blanca y rica— la que primero sintió, resintió y ridiculizó los síntomas externos de la mafia, su cultura extravagante, irrespetuosa, presuntuosa, que construía clubes sociales completos si le negaban la entrada a uno, que compraba los más lujosos carros, los más finos caballos de paso, las haciendas más linajudas, los jueces más rigurosos, los generales más amedallados, en fin, que se puso de ruana todos los valores de la autodenominada ‘gente bien’, que descubrió pronto, para su propia fortuna, que era mejor asociarse a la mafia que luchar contra ella. Y así lo hizo. (párr. 4)

Ya entonces se apreciaban como expresiones exóticas en este provinciano país esas primeras manifestaciones de la cultura mafiosa, que se

distinguían por una ostentación de mal gusto rechazada por una sociedad todavía apegada a sus tradiciones y formalismos. Pero lo exótico fue dando paso a lo cuasievidente, que, sin embargo, por esa misma pacotería de sus elites, se intentaba mimetizar con el remoquete casi divertido de los “mágicos”, haciendo alusión a que ya el dinero mal habido hacía aparecer de la noche a la mañana lo que se quisiera, aunque el Estado ya tenía claro, a través de la ventanilla siniestra del Banco de la República, cuánto podía ello favorecer a las todavía exiguas rentas nacionales (Kalmanovitz, 2003).

La represión contra la marihuana, que paradójicamente le abrió las puertas a la producción en Estados Unidos, ambienta lentamente la producción de cocaína, no solo en Colombia, sino en la región Andina en general, e instala una cadena que ha sido imposible de desmontar y cuya política de represión, en la periferia, se ha centrado en sus dos eslabones más débiles: la producción y el narcotráfico, sin realmente combatir el consumo, la distribución y la financiación en los países del centro. Es imposible de desmontar como el capitalismo mismo, pues ¿qué negocio, legal o ilegal, que pueda tener un rendimiento de 6000/100 puede desmontarse en una economía global de mercado? La droga terminaba siendo funcional al capitalismo mismo.

Pero el costo para Colombia, particularmente, por ser un país geográficamente clave para el procesamiento y tráfico de la droga, en general ha tenido efectos devastadores. A finales de los ochenta, el narcotráfico comprende la importancia de extender sus tentáculos al interior del Estado y concibe una estrategia, podríamos decir simple, de penetración del Congreso. En ese momento, ya era claro que en el Congreso

existían sectores de parlamentarios con nexos con el narcotráfico, pero lo que ya se bosquejaba era la intención de los propios capos por acceder al Congreso, sin duda para ampararse por la inmunidad parlamentaria, que en ese entonces todavía imperaba en Colombia. Esta estrategia es detenida parcialmente, en especial por la resistencia que representó entonces Luis Carlos Galán y el Nuevo Liberalismo y que le costaría la vida a Rodrigo Lara, ministro de Justicia del Gobierno Betancur, y más tarde al mismo Galán, líder del movimiento.

Lo que se da después consagra el trágico destino de Colombia. La influencia del narcotráfico se proyecta dentro de la Constituyente y logra el mandato constitucional de la no extradición, que había sido su bandera desde hacía años (“preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”). Pese a la aparente sumisión de Pablo Escobar, rápidamente la farsa de su sometimiento a la justicia queda al descubierto y la alianza del Estado para lograr su recaptura inicia por la vía pragmática de “el fin justifica los medios”, lo que podríamos denominar como la *colonización mafiosa del Estado* en dos sentidos: primero, por la alianza Estado-mafia que se concreta desde ese momento, y segundo, estrechamente ligada, aunque paralela, por la lucha que el narcotráfico desencadena contra la guerrilla en el campo que ambienta y concreta su alianza con las elites regionales, terratenientes y ganaderas, particularmente, que en poco tiempo daría nacimiento al paramilitarismo en Colombia (Duncan, 2006a).

La presencia de dineros calientes en la campaña triunfante de Samper Pizano en las elecciones de 1994 consagra definitivamente la estrategia de colonización concebida por el narcotráfico,

que, ya entonces, gracias a las convivir (cooperativas para la administración de justicia privada con uso legítimo de armas largas) y al apoyo y el impulso institucional que reciben en la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia, estrecha lazos con el paramilitarismo en su lucha contra la guerrilla, con lo que crea, así, un poderoso dispositivo militar para oponerseles (Medina, 2008).

La fallida estrategia del Gobierno Pastrana por concretar un proceso de paz con las FARC y la doble táctica de estas de fortalecerse a su sombra se catalizan en dos direcciones: la necesidad del narcoparamilitarismo (ya entonces imposible de diferenciar claramente) de combatir a la guerrilla y, segundo, la urgencia de culminar el proceso de colonización del Estado que garantizaría dos propósitos: primero, derrotar definitivamente a la guerrilla, y segundo, garantizar un proceso de paz (léase impunidad) del narcotráfico y el paramilitarismo con la sociedad y el Estado.

La reconocida periodista María Elvira Samper (17 de septiembre de 2008) daba cuenta de ello en los siguientes términos:

No obstante los ingentes esfuerzos para derrotarlo, el narcotráfico sigue vivo y coleando y no solo demuestra una formidable capacidad de adaptación a los cambios en el mercado ilegal, sino que hasta ha llegado a negociar directamente con las instituciones a pesar de no tener motivaciones políticas. Una capacidad de transformación mucho mayor que la de las instituciones para entenderla y enfrentarla, lo cual plantea un gran desafío a las ofensivas del Estado y a las políticas antinarcóticos que han sido un fracaso, como ya nadie se atreve a negar.

La pirámide mafiosa

En ese contexto, y en especial a partir de la presidencia Uribe, cuya sospecha de que su campaña fue apoyada por el paramilitarismo —como varios de sus cabecillas han reconocido en las audiencias respectivas— nunca se han disipado plenamente, y, adicionalmente, a la sombra del proceso de paz con el paramilitarismo, que permitió mimetizar como tales a varios sectores de narcotraficantes, se generaliza en Colombia esta cultura mafiosa que, sin embargo, es un fenómeno que tiene varios niveles de expresión y que no se puede reducir solamente a la captura de un gobierno o, incluso, del Estado, sino que hunde sus raíces en lo más profundo de esa problemática identidad colombiana (Contreras, 2002).

El siguiente esquema pretende dar cuenta de ello, utilizando esa figura tan determinante en

nuestro medio como ha sido la famosa “pirámide”, símbolo precisamente de esa economía cuasimafiosa que se consolidó en toda la geografía nacional, y tratando de sugerir con la metáfora la base sociológica y político-cultural que esta posee, para denotar que no es solo una expresión estructural o superestructural, sino que envuelve la realidad entera de nuestro país (figura 1).

Cultura mafiosa

1. Sociedad y cultura política dominante

Pese a los procesos de “urbanización”, producto más del desplazamiento que de una consecuente política de ciudadanización, Colombia no supera la preeminencia en su cotidianidad de un tipo de legitimación tradicional-carismática en la que la tradición y la figura del líder priman

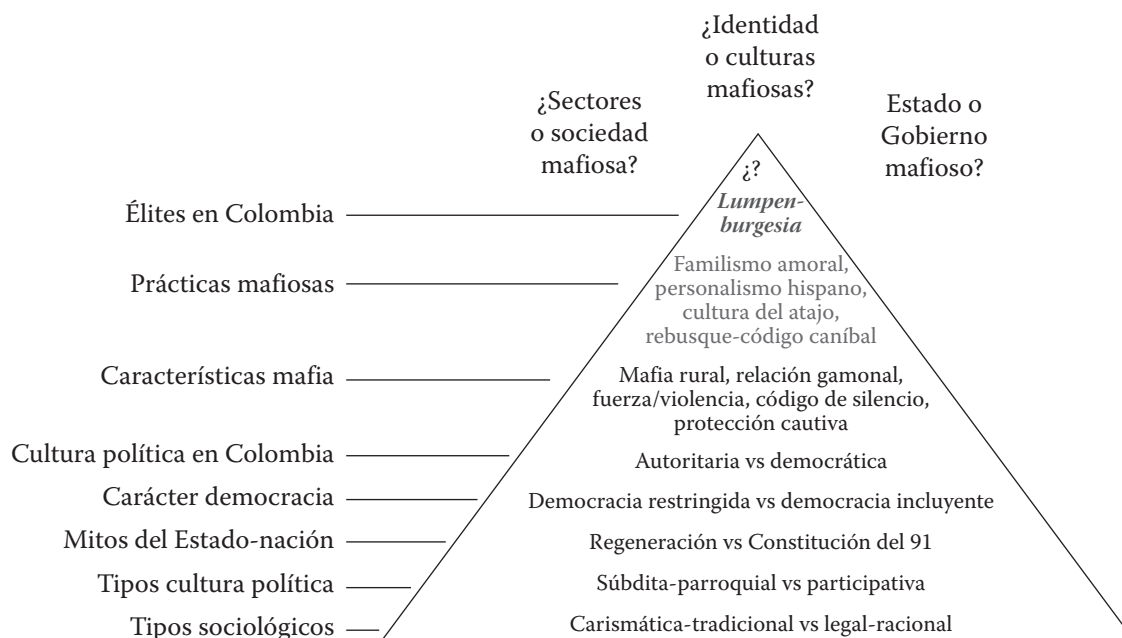


Figura 1. La pirámide mafiosa.

Fuente: elaboración propia, Mejía Quintana, O. (2010).

sobre la de un Estado de derecho neutro e imparcial (Jaramillo, 1994; Palacios & Safford, 2002). Epifenoménicamente, ello se evidencia en nuestra historia política con los “ismos” pululantes que han caracterizado a nuestros partidos políticos hasta el día de hoy: gaitanismo, santismo, galanismo, laureanismo, alvarismo, pastransimo, etc., etc., hasta llegar al uribismo reinante de nuestros días. Incluso la “izquierda”, que debería ser más moderna, mantiene esas divisiones que siguen dando cuenta de mentalidades tradicionales-carismáticas que se inscriben en una tradición política específica, pero se identifican en ella con la figura de un líder particular (López de la Roche, 1994).

Así que nuestra condición sociológica puede caracterizarse como de una “modernización sin modernidad”, a lo que se suma que los mínimos de la modernidad política, la tolerancia y el pluralismo por supuesto tampoco nunca lograron ambientarse en nuestro país, donde primaron, muy propias a su carácter rural y si acaso semirural, la exclusión y la intolerancia, como se evidencia aún en nuestros días. Colombia es, así, un país de mucha ubre y poca urbe, y nuestras “ciudades” son más conglomerados urbanos, caóticos y desorganizados que ciudades concebidas a partir de planes de desarrollo urbano, una noción relativamente reciente en nuestro ordenamiento (Palacios, 1999).

A un tipo sociológico dominante tradicional-carismático corresponde necesariamente un tipo de cultura política súbdito-parroquial, frente a una cultura política participativa, crítica y ciudadana que solo en pequeños sectores parece existir en Colombia. Todo ello propicia esa forma característica de nuestra relación política que es el clientelismo, que, en

sus expresiones más rudimentarias, no es sino una práctica mafiosa de asumir la política y la relación con los partidos y el Estado (Calvi, 2004).

Son esas relaciones de compadrazgo —en lo sustancial rurales y semirurales— y la percepción de que el Estado es para ser usufructuado por los “vivos”, de que la política no persigue un ideal de bienestar general, ni siquiera de bien común —que es un concepto tradicional—, de que, más bien, es la posibilidad de lucrarse en favor propio por debajo del orden legal y de que para ello el camino adecuado es una actitud de complicidad, nunca de crítica o fiscalización, con el poder, lo que se pone de manifiesto con una cultura súbdito-parroquial como la colombiana. El caldo de cultivo de prácticas mafiosas más elaboradas está dado desde este nivel primario de la pirámide social (Gayraud, 2007).

2. Mafia y prácticas mafiosas en Colombia

La cotidianidad rural y semirural colombiana, que adicionalmente es la práctica diaria de los conglomerados urbanos, que en muchos casos no alcanzan a ser ciudades ni a tener una conciencia ciudadana espontánea salvo cuando es directamente garantizada por “órdenes respaldadas por amenazas”, esa mentalidad cuasitradicional que ya ha sufrido un proceso de horadación que la ha convertido en un híbrido malformado que deja de lado sus tradiciones vivas vinculantes rurales para asumir prácticas de sobrevivencia patológicas urbanas, constituye el origen de las prácticas mafiosas, tal como se observa en la mafia siciliana en Italia y en su posterior prolongación urbana en Estados Unidos (Mosca, 2003).

Así lo reconoce de nuevo Molano (28 de marzo de 2008) en sus escritos, que dan cuenta de este piso sociológico:

La mafia, tanto la siciliana como la criolla, se ha hecho contra la ley, ha construido con sangre sus propios canales de ascenso al poder económico y político y, sobre todo, ha impregnado de su cultura —la del “no me dejo”, la del “soy el más vivo”, la del “todo vale huevo”— al resto del país, o para ser exactos, al 84%. Es la cultura de la fuerza a la fuerza, de la justicia por mano propia, de las recompensas por huellas digitales y memorias digitales, del “véndame o le compro a la viuda”, del “le corto la cara, marica”, del “quite o lo quito”. Su escudo de armas: un corazón incendiario. Cuando [se] dice que en el país predomina la cultura mafiosa, [se] hace una apreciación no solo valerosa sino justa. Después de tomarse las juntas directivas y los directorios políticos, la mafia busca ahora imponer sus valores, normas y principios. Es decir, su cultura, más a las malas que a las buenas (párr. 7).

La mafia italiana comienza siendo una mafia rural que establece una relación de sometimiento con sus protegidos, de corte gamonalista en la medida en que es expresión de una jerarquía patriarcal en la que, adicionalmente, el más fuerte somete al débil pero en la que, al mismo tiempo, también le confiere protección (Dickie ²⁰⁰⁷). Es una relación de fuerza y violencia basada en unos códigos de honor y silencio (la *cosa nostra*) que ofrecen una protección cautiva y no espontánea, por supuesto (Burin, 1995).

Estas características de la relación mafiosa, que en esencia provienen de un marco social

tradicional de orden jerárquico-patriarcal, tienen, adicionalmente, una ambientación muy especial en la eticidad hispana, precisamente por rasgos propios de esta (Gambetta, 2005). En efecto, varios componentes axiológicos de nuestro *ethos* favorecen una conversión a estos talantes mafiosos, como ya ha sido evidenciado en varios estudios: el personalismo hispano configura una peculiar modalidad de individualismo exacerbado que no se sujeta a reglas ni a normatividad, a diferencia del anglosajón, y, por el contrario, solo busca la satisfacción de sus expectativas sin tener en cuenta la colectividad ni el interés general (Yunis, 2003).

Ante la inexistencia de un orden normativo consolidado y unas reglas claras, la acción social tradicional desencantada se retrotrae a la única fuente de seguridad ontológica: la familia. Se configura, entonces, un familismo amoral en la medida en que la priorización de la familia con base en el tejido social y en la acción colectiva, por los imperativos de supervivencia ante un Estado débil, desemboca en la priorización de la familia a cualquier precio, incluso por debajo de las normas ético-morales de convivencia. El “todo por la familia” justifica, entonces, todo delito contra un interés general amorfo y difuso que cualquiera usufructúa para su provecho (Camacho, 2001).

De ahí esa cultura del atajo y del rebusque a cualquier precio que termina siendo práctica y social en nuestro contexto y que incluso adquiere rango normativo en la *vox populi* colombiana. A cualquiera que se le pregunte en Colombia cuál es el decimoprimer mandamiento contestará, sonriendo: “no dar papaya”, lo que significa no ser cándido y no dar la oportunidad para ser robado o para

que se aprovechen de uno. Y si le preguntan cuál es el decimosegundo mandamiento, contestará: “a papaya dada, papaya partida”, es decir, todo incauto que dé la oportunidad de que se aprovechen de él o toda situación que potencialmente pueda ser aprovechada, incluso contra la ley, deben ser explotados a favor del agente. Estas dos “máximas” que rigen la vida diaria de cualquier colombiano y frente a las cuales, como sujetos activos o pasivos, tenemos que ser conscientes constituyen máximas de un código caníbal con las que los colombianos —y los extranjeros que vienen a Colombia— deben convivir a diario ante la ausencia de instituciones fuertes que obliguen al cumplimiento de la ley (Kalmanovitz, 2001).

La conclusión que puede refrendarse en estas múltiples prácticas, desde las más cotidianas hasta las de corrupción más elaboradas, ya sea en el sector público o en el privado, así como en toda la cultura política del clientelismo que posibilita la mediación del sistema político colombiano, es la evidencia de que hay una cadena de prácticas mafiosas a todo lo ancho y largo de nuestra eticidad (Duncan, 2006b). Esta cadena se inicia con una legitimación sustancialmente rural, de carácter tradicional-carismático, en la base misma de la pirámide social; sigue con un tipo de cultura política súbdito-parroquial catalizada por un personalismo hispano que no logra ser constreñido por una institucionalidad coercitiva fuerte, y, por tanto, se desvía hacia prácticas de clientelismo y corrupción generalizadas en el sistema político, así como hacia una cultura del rebusque y el atajo aparejada con conductas y códigos caníbales del “todo vale”, por lo que se configura un *ethos* proclive a lo mafioso (Restrepo, 1994).

Élites autoritarias y democracia restringida

Obviamente, esta proclividad a lo mafioso se da por varios factores adicionales: la ausencia de una institucionalidad constrictora, una disposición económico-política excluyente y discriminatoria y la existencia de unas elites lumpezcas, a nivel regional particularmente, en Colombia (Jaramillo, 2004).

El economista Garay da cuenta, también, desde su perspectiva, de esta condición:

Lo primero es aceptar que en Colombia no solo hay hechos aislados de corrupción. Aquí confluyen factores económicos, políticos, sociales y en algunos casos culturales, que cada vez más facilitan el aprovechamiento de intereses públicos por parte de intereses privados. De esta forma, la reconfiguración “cooptada” del Estado consiste en la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, no siempre ilegales, buscan modificar las instancias donde se toman decisiones públicas para cambiar las reglas del juego y de ahí obtener beneficios individuales y validar política, legal y socialmente sus intereses. A veces lo hacen a través de los resquicios en la norma con acciones que, aunque legales en lo penal, son prácticas socialmente inaceptadas. Esto hace que se alteren los patrones morales de la sociedad. Cuando esto se generaliza, hace que el aprovechamiento de lo público trascienda de la corrupción a formas que involucran más aspectos de la sociedad.

[...]

Yo no creo que tengamos un Estado mafioso, como tampoco tenemos una

sociedad mafiosa. Lo que hay son grupos de poder, algunos dominantes, que actúan con prácticas y criterios mafiosos para el beneficio propio, entendidos estos no solo en lo económico, sino también en lo político y en lo social. Lo que lleva a que se esté reconfigurando un Estado con prácticas mafiosas. (*Semana*, 29 de marzo de 2008, párrs. 5 y 7)

La ausencia de una institucionalidad constrictora tiene en nuestro contexto un subfactor sustancial: la debilidad del Estado nación colombiano y, en especial, de un mito de Estado nación que hubiera permitido consolidar una identidad nacional cohesionadora (Yunis, 2003). La identidad nacional colombiana nunca correspondió a la de una “comunidad imaginada”, que por supuesto supone un proyecto de Estado nación concertado consensualmente y legitimado democráticamente (Pécault, 2003).

Por el contrario, lo que se dio, tanto en nuestra vida republicana previa como desde 1886, fue la imposición, por parte de los vencedores correspondientes, de visiones de sociedad, de las cuales, finalmente, se impone la de la Regeneración con la Constitución de Núñez. Ello significó la derrota del proyecto liberal de 1863 y de la posibilidad de que la fracturada —básicamente por su geografía, que hacía inviable una unidad nacional territorial— sociedad colombiana pudiera nuclearse alrededor de un ideal de modernidad: lo que se da es, en últimas, la imposición de un proyecto terrateniente de nación aglutinado alrededor de los valores propios de una sociedad tradicional: la religión, los valores católicos, el autoritarismo de la autoridad no concertada, la intolerancia a la diferencia y el rechazo al pluralismo (Palacios, 2001).

Tal fue la “comunidad imaginada” que se impuso en Colombia desde el siglo XIX y que la República Liberal del 30 al 45, pese a su intención, apenas altera al desatarse esa reacción tradicional —alentada por la Iglesia y el Partido Conservador— que, a través de la violencia institucional, mantiene la inercia autoritaria que más tarde convalida la dictadura de Rojas Pinilla y que, posteriormente, el bipartidismo consagra a favor de una alianza de partidos que conciliaba su lucha al precio de cerrarles el sistema político a nuevas fuerzas sociales e ideológicas.

De ahí que no sea extraño que la identidad colombiana (López, 2008), pese a la Constitución del 91 —el proyecto democrático-social de mayor envergadura en la historia del país—, prefiera apostarle todavía al autoritarismo (Orjuela, 2005). “Los esclavos votan por las cadenas” reza el adagio, y, en consonancia, la identidad colombiana se inclina espontáneamente por la autoridad antes que por la democracia, si bien es una autoridad desvirtuada, de favoritismo y sustracciones, de componendas y regateos turbios, de clientelas y clientelismos, pues no de otra manera sino a través de dádivas se logra mantener tal imposición: es decir, una autoridad mafiosa (Leal Buitrago, 1984).

Si esta pseudoidentidad nacional, en últimas impuesta y hegemónica pero imperante, prefigura nuestro imaginario social nacional hacia la tradición y la autoridad y, a través de ello, hacia el autoritarismo y las formas mafiosas de relacionamiento, la disposición económico-política que le corresponde no podría ser otra que un capitalismo dependiente y una democracia restringida (Urrego, 2004), en especial la segunda, como forma de

articulación política de la sociedad excluyente y discriminatoria que obviamente termina teniendo en el clientelismo y la corrupción sus poleas de transmisión y de amarre para lograr la lealtad de determinados sectores que son los que le dan su base de legitimidad política (Palacios, 2003).

El fenómeno de la corrupción en Colombia es inconcebible y se ha acentuado en el último Gobierno. Los estudios señalan que por lo menos 4 billones de pesos se han perdido por estas conductas, que no son, de nuevo, más que prácticas mafiosas al interior y en relación con el Estado (*El Tiempo*, 30 de septiembre de 2009). Pero ya esas poleas de transmisión sobre las que se vehiculiza la corrupción son, en esencia, formas consolidadas de cultura mafiosa a nivel político que por supuesto ambientaban la captura y colonización del Estado por parte de la mafia en Colombia (Kalmanovitz, 2003). Así lo conceptúa otra reconocida comentarista:

A la política en Colombia se la tomaron en los últimos años dos fenómenos que la tienen en cuidados intensivos. De un lado, el caudillismo del presidente Uribe, que eclipsó cualquier debate distinto al impuesto por su imagen de líder providencial, y del otro, la ascensión de unas nuevas elites mafiosas sustentadas en el temible poder narcoparamilitar que se fueron asentando hasta lograr un poder político que hoy la Corte Suprema de Justicia con sus importantes y decisivas investigaciones está intentando develar ante el país. Al caudillismo providencial de Uribe llegamos por cuenta de la intransigencia de las FARC, que es el peor enemigo de la política, y a la consolidación de estas elites

mafiosas, que en algún momento fueron contrainsurgentes, llegamos por cuenta de esa ética laxa que ha hecho de estas mafias narcotraficantes el mal menor que hay que asumir en la lucha contra la subversión.

[...]

De esas alianzas bipartidistas que consolidaron el cacicazgo tradicional pasamos hace unos años al surgimiento de estas nuevas elites mafiosas que han utilizado a la política regional para acceder al Congreso y, por ende, al poder y al presupuesto.

El problema se agrava aun más cuando estas elites mafiosas y el poder caudillista coinciden en un punto: en su desprecio por los derechos y los principios democráticos que están suscritos y consagrados en la Constitución del 91. Mientras el presidente quiere acabarla porque no permite su reelección, a las nuevas elites mafiosas les molesta su talante garantista con las poblaciones que ellos han sometido y desplazado en su pelea por la tierra (Duzán, 8 de noviembre de 2008, párrs. 3, 5-6).

De esta manera, la democracia restringida alienta las formas mafiosas en la medida en que si, por un lado, amarra la legitimidad de determinados sectores a dádivas que incentivan el clientelismo, por el otro, en los sectores no comprometidos se estimulan igualmente prácticas de rebusque y corrupción como única forma de supervivencia (Leal Buitrago, 2003). En ambas direcciones se estimula una cultura mafiosa que no respeta el estado de derecho ni las reglas y los procedimientos formales, tanto por el lado de quienes directamente se benefician como por el de quienes se ven desfavorecidos, que simplemente van a pretender reemplazar a los privilegiados en

las mismas prácticas. Al final, unos y otros terminan convalidando una misma cultura mafiosa.

Pero detrás de esto hay un sujeto social pasivo sobre el que recae, indirectamente al comienzo y directamente al final, la responsabilidad de este proceso: la existencia de unas elites, en especial las regionales, que nunca estuvieron a la altura de su papel histórico, unas elites lumpezcas, parafraseando la categoría *lumpenburguesía* de André Gunder Frank, que, por su carácter dependiente, nunca lograron consolidar un mercado y un sistema político que garantizara un mínimo de desarrollo equitativo y un régimen, por lo menos liberal, que cumpliera con el precepto formal de igualdad de oportunidades para todos (Frank, 1969). Por el contrario, toda la estructura económico-política se concibió para ser usufructuada casi exclusivamente por ellas, sin permitir la más mínima movilidad social entre las clases, lo que posibilitó que el narcotráfico se convirtiera para muchas capas de la población en un medio de ascenso social que les permitió acceder a donde jamás las habían permitido llegar (Estrada, 2004).

Esa evidencia, aunque se quiera ocultar y no sea de buen recibo en las altas y medias esferas, porque a nivel popular se sabe y se defiende, incluso con la complicidad de muchos sectores académicos que incentivaron su invisibilidad y que con su silencio y desconocimiento voluntario terminaron convalidando toda esta problemática, ya es inocultable en la sociedad colombiana, que además no solo la tolera sino que la justifica y la apoya indirectamente al aceptar sin recato ni escrúpulos la corrupción que a nivel tanto del ejecutivo como del legislativo se sigue presentando (Garay, 2002).

Desde hace años, en Colombia, se impuso la cultura de la mafia, que, entre otros defectos, estableció parámetros del mal gusto y paradigmas de comportamiento chabacano y ordinario, que muchos pobladores, en su alienación, ven como virtudes. Nada raro es rendirle pleitesía al que dispara (y no solo al aire), al que escucha en sus camionetas polarizadas música (?) a alto volumen. Al que con su cuatrimoto de vereda hace arrojar a un lado a los viandantes.

Estamos llenos de arribistas y “carangas resucitadas”. En el ejercicio de la política (o politiquería) valen más los corruptos. Son dignos de admiración y respeto. Y de alguna condecoración oficial o nombramiento diplomático. Mejor dicho, como en un tango, estos tiempos son un “despliegue de maldad insolente”. ¡Cuánto daño nos ha hecho tal cultura! Penetró todos los estamentos sociales y casi se ha vuelto una “política pública” (Spitaletta, 22 de septiembre de 2008, párrs. 1-2).

De ahí las honduras de este fenómeno en Colombia (Estrada, 2008). Tanto desde abajo, con formas tradicionales-carismáticas que la propiciaban, como desde arriba, con unas elites lumpezcas que jamás lograron consolidar un proyecto nacional y una institucionalidad democráticos y fuertes, la cultura mafiosa ha tenido en Colombia un caldo de cultivo ideal para reproducirse (Pizarro Leongómez, 2004). De ahí que hasta las propias clases “altas” hayan caído en la tentación de lo mafioso, como bien lo ha sabido ver un educador de primer orden:

Maestros y directivos de colegios privados de estratos altos de diferentes ciudades del país comentan con preocupación lo que viene ocurriendo en ese segmento

privilegiado de la educación. [...] Una maestra con mucha experiencia me decía que le sorprendía un proceso que ella llamaba “la traquetización de los ricos”, que se manifiesta en las actitudes agresivas y prepotentes de los estudiantes.

Comportamientos de muy mal gusto fueron introducidos por los narcotraficantes [...]. Compraron fincas, hicieron edificios espantosos, construyeron casas enormes, inventaron zoológicos, fabricaron reinas y modelos [...].

Con ingenuidad creí que las segundas generaciones, educadas en los mejores colegios privados y en universidades extranjeras, terminarían por mimetizarse bajo el ropaje de modales y comportamientos sociales más refinados y decentes y se convertirían en un par de décadas en empresarios discretos. Pero ocurrió lo inesperado: muchos ricos cuyos bienes eran incuestionables asumieron los comportamientos y gustos de los “traquetos”. La discreción con que las familias tradicionales habían llevado su riqueza dio paso al exhibicionismo propio de los nuevos ricos [...].

Muchas adolescentes aspiran a su primera lipoescultura o a sus implantes de silicona, porque sus madres ya lo han hecho emulando la belleza que fabricaron las fortunas rápidas en las muchachitas que, siendo las queridas de los narcos, aspiraban también a ser modelos o reinas. En algunos de estos colegios se hizo necesario organizar parqueaderos para las burbujas de los guardaespaldas de los alumnos que, al igual que sus padres, sienten que circular rodeados de personal armado es gran símbolo de poder. Lo malo es que estos niños son las víctimas de unos patrones sociales

perversos, sostenidos y profesados como normales por sus padres que, sin duda, detentan buenas cuotas de poder en la sociedad. Y, más tarde, pero mucho más pronto de lo que quisiéramos, heredarán esa tajada del ponqué repitiendo y agrandando su prepotencia y convirtiéndose en victimarios (Cajiao, 8 de diciembre de 2008, párrs. 1-5).

Pero no es de extrañar que unas elites sin identidad, sin un mito de Estado nación fuerte, que desde siempre negaron sus raíces indígenas y afrodescendientes, que incluso negaban su piel y el color de su pelo y trataban de “blanquearse” por todos los medios cuando su origen no era “puro”, siendo como somos todos, mestizos hibridizados, tan débiles culturalmente y acomplejadas de sí mismas, sucumbieran fácilmente a lo único tangible que habían aprendido a “cultivar”: el dinero fácil, los bienes suntuarios, el lujo desmedido, etc. De ahí que cayeran fácilmente en la trampa de la cultura mafiosa que ellas mismas habían propiciado con su usufructo y la discriminación descomedidos (Gutiérrez Girardot, 1980).

La presencia de lo mafioso no solo en la realidad, sino en el imaginario colombiano, es de una contundencia inocultable. Sus prácticas cotidianas, sus referentes simbólicos, su imaginario social y su identidad nacional gravitan en y se definen desde la cultura mafiosa y el culto a lo mafioso que las grandes mayorías ya reivindican sin remordimientos. Para darse cuenta no es sino oír las audiencias, en su lenguaje de intolerancia y discriminación, defendiendo la exclusión de las minorías que no se atienen a sus parámetros de vida, alentando una violencia ciega contra aquellas mientras se autoproclaman a sí mismas, a la luz de

los ejemplos carismáticos, portadoras de la verdad de la “patria”. Es una verdad mafiosa, por supuesto, del “todo vale” por encima de cualquiera y de la misma institucionalidad.

Así lo recoge María Elvira Bonilla (4 de octubre de 2009) con justificado pesimismo:

El narcotráfico sigue vivo y coleando, imparable fuerza económica con su máquina de lavar dólares, que corrompe la política, las instituciones del Estado y sus aparatos represivo y de justicia; intacto en su capacidad para prostituir toda expresión de cultura, impone la narcoestética en la moda, la arquitectura, la decoración; construye los nuevos estereotipos, referencias e imaginarios sociales. Se instaló definitivamente en el alma colombiana.

Los mafiosos, hijos de la ilegalidad y su carga de antivalores, poco a poco dejan de ser objeto de censura o cuestionamiento. Se toleran silenciosamente, complacientemente como grandes consumidores de artículos de lujo. Amos y señores de los centros comerciales, restaurantes y la clase ejecutiva de los aviones comerciales. Camuflados [...] detrás de anteojos oscuros, del brazo de mujeres envueltas en diminutas minifaldas, vulgaridad de escotes y descaderados. El capo como referencia de comportamiento social, con toda su rudeza y arbitrariedad, además de galán de telenovela, es comprador de corazones de reinas, modelitos y chicas de farándula [...].

Son los nuevos ricos de la época, la clase emergente a la que hacía referencia el presidente Julio César Turbay hace ya 30 años, cuando vaticinó que sus miembros serían los nuevos protagonistas de la vida del país, hoy legitimados por la pantalla

televisiva, dispensadora del éxito y la aceptación social.

La historia trágica del país, con sus muertos y su dolor, su desmoronamiento institucional, va camino a quedar enterrada y olvidada por la extravagancia y la vulgaridad de las tetas y las colas que estimulan cada noche a machos elementales, en la oscuridad de las alcobas tanto de los distinguidos como de los populares hogares de colombianos (párrs. 3-6).

Ahora: la justicia mafiosa

La intuición que guía este escrito es que la justicia, que en su momento creímos fuera de la pirámide mafiosa, también se corrompió. El Cartel de la Toga, que en este momento viene siendo procesado no solo en los tribunales sino por la opinión pública, ha puesto en evidencia que no era la excepción sino parte de la regla y que la cultura mafiosa dominante en Colombia se había extendido hasta el imperio de la justicia. El Estado de derecho, que se creía defendido pulcramente por la administración de justicia, quedó sometido a una colonización mafiosa del aparato de justicia en sus más altas cortes.

Las decisiones en derecho, que, gracias a las teorías críticas, hacía mucho habíamos aprendido a sospechar como políticas e ideológicas, ahora también podemos temerlas como corruptas. El impacto, no solo del conflicto sino de las tensiones de una sociedad en proceso de modernización —más que de modernidad—, lentamente empujó al poder judicial, que en todo caso es la expresión superestructural de unas clases medias en ascenso por contener los excesos de las elites económicas y políticas, a contaminarse del cieno de una cultura mafiosa

y a caer en el modelo caníbal de competencia salvaje que se apoderó del mundo de la vida en Colombia.

El fenómeno ya se veía venir en una cultura jurídica que se deslizó, lenta pero inexorablemente, más que al poder, al poder abusivo del poder. Replicando las prácticas mafiosas de sus hermanas ramas legislativa y ejecutiva, se resbaló al abismo y, sin ideal moral regulativo, terminó en las arenas movedizas de un poder mafioso que se la engulló.

La responsabilidad de las facultades de derecho es directa. Su afán de formación técnico-jurídica y de reducir todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a formar “abogados capaces” hizo que se olvidaran de formar “personas íntegras”. El resultado está ahí. Los cantos de sirena del poder político y económico sedujeron a una generación de jóvenes abogados que no supieron interpretar su momento histórico y social y cayeron postrados ante su propia y pobre ambición, que no solo los llevó a la ruina, desafortunadamente, sino que signó con su ejemplo a toda una cohorte de contemporáneos.

Ese fue el resultado de tanto decano de derecho impreparado y mediocre, de formación académica nula, si acaso buen litigante, con ninguna formación en maestría ni doctorado ni en derecho ni en ciencias sociales, que pretendió “innovar” con planes de estudio reduciendo la carrera a una instrucción técnico-jurídica, no debilitando, sino desapareciendo, la columna social y humanista y, con ello, afectando el núcleo moral y ético de la formación jurídica.

El filósofo francés Paul Ricoeur ha planteado que el trágico dilema del derecho contemporáneo es que: o se inclina hacia lo justo o

se inclina hacia lo bueno. Habermas, en su teoría del derecho (*Facticidad y validez*, de 1992), replica el dilema en la decisión judicial hablando de decisiones justas para todos o decisiones buenas para algunos, la tragedia del juez. Obviamente, lo bueno puede ser lo bueno caníbal, es decir, la reivindicación de usos, costumbres y pautas de comportamiento (in)éticos frente a una concepción de (in)justicia abstracta, etnocéntrica y excesivamente universal, funcional a la globalización neoliberal. El derecho se la juega entre esos dos extremos.

Conclusiones

Las investigaciones judiciales de la parapolítica dan cuenta de la contaminación alcanzada en los poderes regionales y en el legislativo, pero aún no llegan plenamente a desentrañar sus tentáculos a nivel ejecutivo, si bien todos los indicios (las interceptaciones ilegales a la Corte Suprema de Justicia y a los miembros de los partidos de oposición, entre otros, así como los crímenes de lesa humanidad de los militares mal llamados “falsos positivos” contra la población civil) permiten adivinar cuál es la base de esa punta del *iceberg* que apenas estamos observando. Pero las proyecciones al día de hoy (octubre de 2009) no pueden ser menos que pesimistas sobre el poder y la institucionalización de la mafia en Colombia.

Varias conclusiones pueden inferirse de esta reconstrucción. La cultura política colombiana, en su base y sus prácticas cotidianas, es en lo sustancial lo que se denomina súbdito-parroquial, pues está fundada en sentimientos tradicionales y carismáticos. Ese es el caldo de cultivo de prácticas mafiosas, catalizadas por

la ausencia histórica de una institucionalidad fuerte, un mercado democratizado y un imaginario nacional proyectivo. Estas prácticas mafiosas se expresan en la cultura del atajo y en los reconocidos “decimoprimeros” y “decimosegundos” mandamientos colombianos: “no dar papaya” y “a papaya dada, papaya partida”. Esa es la evidencia cotidiana de una cultura mafiosa, tanto de los que la usufructúan como de quienes nos tenemos que defender de ello.

Sin duda, la muerte de Galán fue el triunfo de la mafia en Colombia como punto de inflexión histórica. Lo narco se tomó la región, después se tomó los gobiernos locales, después se unió al paramilitarismo en su lucha contra la guerrilla, después colonizó el Congreso y, finalmente, capturó porciones del Gobierno y, a través del él, del Estado en Colombia. Pero esa es una realidad frente a la cual, como el avestruz, hemos preferido hundir la cabeza para no ver lo que está sucediendo. Lo cierto es que el número de funcionarios públicos y parlamentarios investigados, judicializados y condenados es de por sí la punta del *iceberg* de un fenómeno cuya magnitud la sociedad colombiana no ha querido reconocer por complacencia, por complicidad o por miedo.

Además, los tiempos en que el débil imaginario nacional gravitaba en torno a los triunfos de los ciclistas (los escarabajos, nos decían), al café o, en los setenta, al “Macondo” y el realismo mágico de García Márquez han muerto. Desde hace 20 años, el referente principal, en términos de la conciencia de identidad que se mide en el cine, el arte, la narrativa, las telenovelas o la música (los “corrillos prohibidos”, por ejemplo), pasa por la cultura mafiosa: referente que las viejas generaciones todavía podían ver críticamente, pero que para las nuevas se

constituye en símbolo de identificación social, por lo que adaptan su hablado, su vestir, sus valores ostentosos, su desprecio a la diferencia y las minorías y su exaltación de lo rural, de los caballos, de lo burdo y del irrespeto al Estado de derecho.

Finalmente, habría que recabar en la razón de por qué lo narco se vende en los medios. Son varias razones: primero, porque lo narco es el espejo de esta sociedad y uno tiene la necesidad de mirarse al espejo para reconocerse y para retocarse; segundo, porque hoy por hoy es uno de los referentes más emblemáticos de nuestra nacionalidad: al colombiano promedio le gusta autoperibirse como el “duro”, el que “todo lo puede”, para el que “todo vale”, es decir, como un mafioso, y, tercero, ¿porque a quién no le gusta verse reflejado en el espejo?

Referencias

- Bonilla, M. E. (4 de octubre de 2009). Alma mafiosa. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/opinion/alma-mafiosa-columna-164899>
- Burin, P. (1995). *Cultures mafieuses: l'exemple colombien*. París: Stock.
- Cajiao, F. (8 de diciembre de 2008). La traqueización de los ricos. *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4711651>
- Calvi, F. (2004). *El misterio de la mafia: la organización al descubierto*. España: Gedisa.
- Camacho, Á. (2001). Mesa redonda: perspectiva sobre el desarrollo económico. En G. Misas Arango (ed.), *Desarrollo económico y social en Colombia* (pp. 520-522). Bogotá: Unibiblos.

- Contreras, J. (2002). El candidato de los paras. En *El señor de las sombras* (pp. 111-150). Bogotá: Oveja Negra.
- Dickie, J. (2007). La mafia se establece en Estados Unidos (1900-1914). En *Cosa nostra: historia de la mafia siciliana* (pp. 221-240). Barcelona: Random House Mondadori.
- Duncan, G. (2006a). La escuela y la secuela de los paramilitares. En *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia* (pp. 240-277). Bogotá: Planeta.
- Duncan, G. (2006b). Las redes mafiosas en las ciudades. En *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia* (pp. 333-348). Bogotá: Planeta.
- Duzán, M. J. (8 de noviembre de 2008). Las lecciones de Obama. *Semana*. Recuperado de <https://www.semana.com/opinion/articulo/las-lecciones-obama/97113-3>
- El Tiempo*. (30 de septiembre de 2009). 4 billones pierde el país cada año por la corrupción. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6245647>
- Estrada, J. (2004). Las instituciones del modelo neoliberal. En *Construcción del modelo neoliberal en Colombia* (pp. 141-202). Bogotá: Aurora.
- Estrada, J. (2008). Capitalismo criminal: tendencias de acumulación y estructuración del régimen político. En J. Estrada, S. Moreno, O. Mejía Quintana, I. León, P. Reyes, C. Medina, C. M. Conaghan y T. Blickman, *Capitalismo criminal* (pp. 63-78). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <http://www.espaciocritico.com/node/42#dnld>
- Frank, A. G. (1969). Neoimperialismo y neodependencia. En *Lumpenburguesía: lumpendesarrollo* (pp. 89-130). Santiago: Ediciones AGE.
- Gambetta, D. (2005). *La mafia siciliana*. México: FCE.
- Garay, L. J. (coord.). (2002). Construcción de lo público y ciudadanía. En *Repensar a Colombia: hacia un nuevo contrato social* (pp. 67-130). Bogotá: PNUD.
- Gayraud, J. F. (2007). La expansión, el objetivo y las armas. En *El G9 de las mafias organizadas* (pp. 67-76, 247-263). España: Tendencias Editoras.
- Gutiérrez Girardot, R. (1980). La cultura de viñeta. En *Manual de historia de Colombia* (pp. 447-452) (tomo III). Bogotá: Colcultura.
- Jaramillo, R. (1994). *Colombia: la modernidad postergada*. Bogotá: Temis.
- Jaramillo, R. (2004). Sobre autoritarismo, docencia y el estado precario de la modernidad en Colombia. En *Problemática actual de la democracia* (pp. 139-174). Bogotá: Ibáñez.
- Jaramillo Uribe, J. (1997). Algunos aspectos de la personalidad histórica de Colombia. En *La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos* (pp. 131-153). Bogotá: Biblioteca Básica Colombiana.
- Kalmanovitz, S. (2001). *Las instituciones colombianas en el Siglo XX*. Bogotá: Alfaomega.
- Kalmanovitz, S. (2003). Postcripto. El inicio turbulento del siglo XXI. En *Economía y*

- nación: una breve historia de Colombia* (pp. 571-592). Bogotá: Norma.
- Leal Buitrago, F. (1984). Formación nacional y proyectos políticos de la clase dominante en el siglo XIX. En *Estado y política en Colombia* (pp. 92-135). México: Siglo XXI.
- Leal Buitrago, F. (2003). El sistema político del clientelismo. En *Democracia y sistema político* (pp. 63-140). Bogotá: Iepri.
- López, A. (2008). *El cartel de los sapos*. Bogotá: Planeta.
- López de la Roche, F. (1994). *Izquierdas y cultura política*. Bogotá: Cinep.
- Martz, J. (1969). Elementos de la vida nacional. En J. Martz y F. Correa, *Colombia: un estudio de política contemporánea* (pp. 13-24). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Medina, C. (2008). El narco-paramilitarismo. Lógicas y procesos en el desarrollo de un capitalismo criminal. En J. Estrada, S. Moreno, O. Mejía Quintana, I. León, P. Reyes, C. Medina, C. M. Conaghan y T. Blickman, *Capitalismo criminal* (pp. 104-141). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <http://lahaine.org/b2-img08/medinac.PDF>
- Mejía Quintana, O. (2010). Cultura política mafiosa en Colombia. *Ciencia Política*, 5(10), 22-42. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/18867/19757>
- Molano, A. (28 de marzo de 2008). Cultura mafiosa. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/opinion/cultura-mafiosa-columna-8049>
- Mosca, G. (2003). ¿Qué es la mafia? México: FCE.
- Orjuela, L. J. (2005). Estado, sociedad y régimen político en Colombia. En *La sociedad colombiana en los años noventa* (pp. 72-86). Bogotá: Universidad de los Andes.
- Palacios, M. (1999). El (des)encuentro de los colombianos con el liberalismo. En *Parábola del liberalismo* (pp. 143-236). Bogotá: Norma.
- Palacios, M. (2001). Violencias. En *De populistas, mandarines y violencias* (pp. 159-216). Bogotá: Planeta.
- Palacios, M. (2003). Legitimidad elusiva. En *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994* (pp. 237-288). Bogotá: Norma.
- Palacios, M. & Safford, F. (2002). La violencia política en la segunda mitad del siglo XX. En *Colombia: país fragmentado, sociedad dividida* (pp. 629-678). Bogotá: Norma.
- Pécault, D. (2003). Crisis y construcción de lo público. En *Violencia y política en Colombia: elementos de reflexión* (pp. 135-161). Medellín: Hombre Nuevo.
- Pizarro Leongómez, E. (2004). La erosión progresiva del Estado, la economía y el tejido social. En *Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia* (pp. 203-254). Bogotá: Norma.
- Restrepo, G. (1994). Sobre la esfinge y el ladino. En *Arte y cultura democrática* (pp. 157-248). Bogotá: Fundación Luís Carlos Galán.
- Samper, M. E. (17 de septiembre de 2008). Cambiar el “chip”. *Revista Cambio. Semana*. (29 de marzo de 2002). “A los colombianos se nos corrió la frontera moral”.

Recuperado de <https://www.semana.com/nacion/articulo/a-colombianos-corrio-frontera-moral/91837-3>

Spitaletta, R. (22 de septiembre de 2008). Una (in) cultura mafiosa. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elspectador.com/opinion/una-cultura-mafiosa-columna-39779>

Urrego, M. Á. (2004). Un estado nacional inconcluso y en crisis. En *La crisis del Estado*

nacional en Colombia (pp. 63-100). Morelia: Universidad Michoacana de Hidalgo.

Valencia, L. (21 de mayo de 2008). El 'narc déco', inadvertida revolución cultural. *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4199745>

Yunis, E. (2003). Sobre la formación de la mentalidad del colombiano. En *Por qué somos así. ¿Qué pasó en Colombia? Análisis del mestizaje* (pp. 103-138). Bogotá: Temis.